



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: FRANCISCO GAVIRIA ARROYO
Demandados: ACP COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. Y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 002 2022 00262 01
Sentencia: S-304

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por la **AFP COLFONDOS S.A.**, al igual que el grado jurisdiccional de **Consulta** concedido a favor de **COLPENSIONES** en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de julio de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

FRANCISCO GAVIRIA ARROYO demandó a COLPENSIONES, a COLFONDOS S.A. y a PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare la ineficacia del traslado y afiliación efectuado al Régimen de Ahorro

Individual –RAIS- administrado por COLFONDOS S.A. en 1994, como su traslado a PROTECCION S.A. en 2016.

Como consecuencia, solicita se ordene el retorno al Régimen de Prima Media –RPM- administrado por COLPENSIONES, debiéndose activar dicha afiliación en los dos meses siguientes de producirse el fallo; y que se ordene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar todas las cotizaciones y rendimientos que reposan en la cuenta de ahorro.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 13 de julio de 1960, que cuenta con más de 1.610 semanas cotizadas según historia laboral de PROTECCIÓN S.A., que cotiza desde febrero de 1990 al RPM y que a la entrada en vigencia de la ley 100 contaba con 33 años y 195 semanas cotizadas. Que en mayo de 1994, cuando laboraba en la empresa CONSULTING LTDA., le solicitaron afiliarse a COLFONDOS S.A. y por medio de talento humano gestionaron la firma del formulario con los datos personales sin mediar ningún tipo de asesoría y que no le fue informada la prohibición de cambio de régimen cuando faltaren 10 años o menos. Que en el año 2016 se trasladó a PROTECCIÓN S.A. para demostrar su inconformidad con COLFONDOS; que solicitó a Colpensiones traslado de régimen, el cual fue negado y que solicitó a COLFONDOS información de la afiliación, la cual fue igualmente negada; asimismo, que elevó solicitud a PROTECCIÓN sin obtener respuesta en concreto.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES señaló que es cierta la fecha de nacimiento; es cierto que solicitó el traslado de régimen el cual fue negado; frente a los demás hechos manifestó que no le constan por corresponder a situaciones propias de otras administradoras. Se opuso a las pretensiones y como excepciones propuso carga dinámica de la

prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, inexistencia de la obligación del traslado, improcedencia de intereses moratorios, legitimación en causa por pasiva, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución, de cuotas de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntarios indexados, buena fe de Colpensiones, improcedencia de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. al contestar, admite la fecha de nacimiento del demandante, las semanas cotizadas aclarando que cuenta con 1.657 semanas; aceptó el traslado de COLFONDOS a esta entidad, así como la solicitud elevada a la cual se le dio respuesta de forma concreta a todas las incógnitas del actor. Frente a los demás hechos manifiesta que no le constan por referirse a situaciones dadas entre la demandada y otra administradora. Se opuso a las pretensiones, indicando que el acto es existente, válido y exento de vicio del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguros previsionales.

Finalmente. COLFONDOS S.A. al dar contestación manifestó que no le consta la fecha de nacimiento del demandante, ni el número de semanas; niega que la empresa le hayan solicitado afiliarse, pues fue él mismo quien solicitó su vinculación a COLFONDOS, traslado que obedeció una debida asesoría; que al actor se le realizó una proyección pensional; es cierta la solicitud elevada por el demandante a la cual se le dio respuesta completa y detallada y frente a los demás hechos manifestó que no le constan por tratarse de hechos del demandante y terceros ajenos a esta administradora. Se opuso a todas las pretensiones. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, ratificación de la

afiliación a Colfondos, prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, compensación y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 27 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el demandante; **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar al actor al RPM administrado por COLPENSIONES, trasladando a dicha entidad los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos. De igual modo, condenó a COLFONDOS S.A. y a PROTECCION S.A. a devolver a COLPENSIONES el porcentaje correspondiente a gastos de administración, los cuales se componen del pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, pagos correspondientes a la AFP por su gestión, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. Y señaló que al momento de cumplirse la orden los conceptos deberán parecer discriminados en sus respectivos valores, detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que lo justifique, durante el tiempo que permaneció afiliado; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a reactivar la afiliación del demandante al RPM, sin solución de continuidad y recibir todos los dineros que le sean trasladados por las administradoras, realizando la respectiva actualización de la historia laboral; y **CONDENÓ** en costas a las AFP COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión de primera instancia, COLFONDOS S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, manifestando que no se tuvo en cuenta lo dicho en el interrogatorio de parte por el demandante al señalar que el traslado lo

efectuó debido a que en la oficina de recursos humanos le pusieron de presente el formulario de afiliación, por ende, cada caso es especial y no es solamente indicar que no le brindaron una buena asesoría, y que deben revocarse la condena impuesta frente a devolver las sumas adicionales a los gastos de administración, garantía de pensión mínima, seguros previsionales, debido a que las actuaciones de la AFP están enmarcadas en parámetros legales, por lo que estos cobros obedecen a mandatos impuestos por la ley, y mucho menos que sean a cargo de su propio patrimonio e indexados.

De igual forma, se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el respectivo traslado las partes, **COLPENSIONES** presentó sus alegatos de conclusión manifestando que se debe analizar lo referente a la imposibilidad de traslado de régimen de la demandante por la prohibición legal de los 10 años o menos, establecido legalmente. Por otro lado, indica que los vicios en el consentimiento, deben ser probados y no solo referidos, y debe tenerse en cuenta que son hechos que pasaron hace muchos años, y se desconoce ciertamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que tomar una decisión resultaría en contravía del debido proceso y seguridad jurídica. Y, por último, señala que la parte actora es plenamente capaz, por lo que su decisión fue libre y espontánea al considerar más favorable su afiliación al RAIS.

El apoderado judicial la **DEMANDANTE** solicita se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la ineficacia de traslado de régimen pensional, con devolución de todos los conceptos, ya que la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en establecer que en estos casos de traslado de régimen la carga de la prueba le corresponde al fondo privado de pensiones y no se requiere tener un beneficio "tradicional"

para que proceda su declaratoria; afirma que en este caso el fondo privado no probó haberle informado al demandante sobre las consecuencias del traslado de régimen como tampoco sobre sus características. En el interrogatorio de parte quedó demostrado que el actor se trasladó engañado por los asesores de la AFP, circunstancias que lo condujo a afiliarse en dicho fondo privado, y siendo enfático que los traslados horizontales no convalidan del deber de información de las anteriores AFP.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLFONDOS S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** el SR. FRANCISCO GAVIRIA ARROYO nació el 13 de julio de 1960; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones desde el 1º de febrero de 1990¹, acumulando en esa entidad un total de 199,43 semanas; **iii)** que el 28 de abril de 1994² suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP COLFONDOS S.A.; **iv)** y que el 27 de julio de 2016 realizó traslado hacia PROTECCIÓN S.A.³, entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada

¹ PDF 03 de la Carpeta de la Contestación de Colpensiones.

² Folio 22 de la Contestación de Colfondos S.A.

³ Folio 31 a 33 de la Contestación de Protección S.A.

en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁴, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad*

⁴ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete

a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación

entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, cuando estaba laborando para el año de 1994 se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A. debido a que le fue entregado el formulario por parte del departamento de Recursos Humanos de la empresa, sin mayor indicaciones; y que posteriormente se trasladó a PROTECCIÓN en el año 2016 al ver que por parte de COLFONDOS no se le dio ningún tipo de asesoría, estableciéndose esta afiliación también por medio del departamento de recursos humanos sin mediar asesoría alguna.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Sin que tampoco sea de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar.

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por COLFONDOS S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor FRANCISCO GAVIRIA ARROYO estuvo vinculado a cada entidad.

Se advierte igualmente que la orden tanto a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima deben incluir la respectiva indexación, tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene la apoderada de COLFONDOS S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por*

Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá confirmar las condenas proferidas, reiterando que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, tal y como lo señaló el juez.

En consecuencia, se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia íntegramente.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de COLFONDOS S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de julio de 2023.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **128a2315693781dcf19194ccc656b7938f259e435c20571732f01edc47fc2ac3**

Documento generado en 03/11/2023 01:25:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>